

Unidad de Acceso a la Información Pública del Órgano Judicial: San Salvador, a las once horas con cincuenta minutos del día veintisiete de mayo de dos mil diecinueve.

Por recibida la anterior solicitud de información suscrita por el ciudadano XXXXXXXXXXXX, en su calidad de apoderado general judicial con cláusula especial de XXXXXXXXXXXX, a la cual se le ha asignado la referencia 334-2019, y en la que requiere:

“AL JUZGADO ESPECIALIZADO DE SENTENCIA DE SAN SALVADOR CON DENOMINACION ADMINISTRATIVA -A, Y A LA CAMARA ESPECIALIZADA DE LO PENAL, SE LES SOLICITA UNA COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE NOTIFICACION PERSONAL FIRMADA POR EL PROCESADO XXXXXXXXXXXX, EN LA QUE CONSTA QUE SE LE NOTIFICO LA RESOLUCION DICTADA EN EL INCIDENTE DE APELACION MARCADO BAJO REFERENCIA: 113 A LA 122(APE)/16-10, Y UNA COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE NOTIFICACION PERSONAL FIRMADA POR EL PROCESADO XXXXXXXXXXXX, EN LA QUE CONSTA QUE SE LE NOTIFICO LA RESOLUCION DICTADA POR LA SALA DE LO PENAL EN LA REFERENCIA JUDICIAL 344 C 2016, AMBAS RELACIONADAS AL PROCESO PENAL SEGUIDO CONTRA XXXXXXXXXXXX EN EL JUZGADO ESPECIALIZADO DE SENTENCIA DE SAN SALVADOR CON DENOMINACION ADMINISTRATIVA -A, IDENTIFICADO EN SEDE DE SENTENCIA CON REFERENCIA 169-183-A-2015, ACLARANDOSE QUE SE SOLICITAN LAS ACTAS DE NOTIFICACION DE AMBAS RESOLUCIONES EFECTUADAS AL PROCESADO DE MANERA PERSONAL Y POR MEDIO DE LAS CUALES SE LE GARANTIZO EL DERECHO DE CONOCER EL CONTENIDO DE LAS MISMAS, LUEGO DE SER DICTADAS, Y NO AL ACTA DE NOTIFICACION DE FIRMEZA DE LA SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN SU CONTRA.” (sic).

Sobre la petición anterior se hacen las consideraciones siguientes:

1) En efecto el objeto de la Ley de Acceso a la Información Pública (en adelante LAIP), según lo establecido en su art. 1 es la de “garantizar el derecho de acceso de toda persona a la información pública, a fin de contribuir con la transparencia de las actuaciones de las Instituciones del Estado”. Y según el art. 4 letra a) de ese mismo cuerpo normativo, establece que la información pública está regida por el principio de máxima publicidad, que exige que la información en poder de los entes obligados sea pública y su difusión sea irrestricta, salvo excepciones expresamente establecidas en la ley.

2. El artículo 10 de la LAIP, establece el tipo de información que se considera oficiosa, o mejor dicho que se debe dar a conocer al público sin necesidad de una solicitud de acceso, y el art. 13 de la misma ley, establece qué tipo información debe darse a conocer a todas las personas por parte del Órgano Judicial.

3. Pese a todo ello, no toda petición de información que se solicite puede ser evacuada, por tanto jurisprudencialmente se han construido límites a la obtención de la información por esta vía administrativa que ofrece la LAIP, haciéndose una distinción a lo que debe considerarse información de índole administrativo y la información de carácter jurisdiccional.

II) Al respecto, en las resoluciones de los procesos de amparo con referencias 482-2011 de fecha 06/07/2015; 553-2013 de fecha 29/09/2015; y el proceso de inconstitucionalidad con referencia 7-2006 de fecha 20/08/2014, se indicó que a partir de una interpretación sistemática de los arts. 110 literal e) de la LAIP y 9 del Código Procesal Civil y Mercantil se determina que hay una intención manifiesta de que la información relativa a los procesos jurisdiccionales se obtenga de acuerdo con las normas que rigen a estos, y no con las normas estatuidas por la LAIP. En este sentido, debe entenderse que el acceso a la información pública que facilita la LAIP únicamente alude al ámbito administrativo de los juzgados y tribunales, no al jurisdiccional.

En este contexto, se establece que: "... la información jurisdiccional es todo dato que constata la existencia o realización de un acto que tiene efectos o consecuencias directas o indirectas en un proceso o procedimiento tramitado ante autoridades que ejercen jurisdicción, tales como fases del proceso, demandas, informes, audiencias, incidentes, recursos, decisiones, entre otros. Este tipo de información alude a los actos por medio de los cuales se inicia, impulsa y finaliza un proceso. Así las cosas, la idea de información administrativa resulta excluyente: será administrativa toda información que no sea jurisdiccional o que no tenga una conexión con los actos que producen consecuencias en los procesos o procedimientos judiciales, tales como el contenido de los libros administrativos, agendas de sesiones, estadísticas, número de referencia de proceso en trámite o fenecidos, etc. (...) el acceso a la información pública que facilita la LAIP únicamente alude al ámbito administrativo de los juzgados y tribunales, no al jurisdiccional, pues resulta factible obtener información sobre este último de conformidad con las reglas que rigen la materia correspondiente..." (sic).

Sobre el efecto vinculante de las decisiones del Tribunal Constitucional en la improcedencia emitida en el proceso de hábeas corpus con referencia 445-2014, de fecha 25/09/2014, la cual puede ser consultada directamente en el Portal del Centro de

Documentación Judicial -por ser información de carácter oficiosa- se “... *ha afirmado la obligación de los aplicadores jurisdiccionales o administrativos de cumplir con lo ordenado en las reglas adscritas a las disposiciones constitucionales, así como con lo dispuesto en la interpretación de los contenidos de los derechos fundamentales efectuada a través de los procesos constitucionales, entre ellos, los de amparo y hábeas corpus...*” (itálicas agregadas).

En dicha decisión, la Sala de lo Constitucional indicó que sus resoluciones y fallos “... no pueden entenderse como documentos conformados por segmentos aislados e incoherentes, carentes de efectos obligatorios, sino como un todo armónico y unitario en el que se reflejan y concretiza la actuación jurisdiccional y la fundamentación y decisión del tribunal, todo lo cual está dotado de plena obligatoriedad para las partes procesales; y en el caso de las resoluciones y fallos de la Sala de lo Constitucional, ***estos tienen efectos vinculantes jurídicamente para las autoridades***”(itálicas y resaltados agregados).

En el mismo sentido, se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en la resolución emitida en el proceso de inconstitucionalidad con referencia 7-2006, del 20/08/2014, en la cual literalmente se dijo: “Esta resolución únicamente delimita los ámbitos competenciales que corresponden al Oficial de Información de la Corte Suprema de Justicia y los que atañen a esta Sala. En realidad, lo que se ha hecho es aclarar que la información administrativa que corresponda al Órgano Judicial deberá ser tramitada ante el primero, mientras que la información jurisdiccional ante los respectivos tribunales...”(sic).

En consonancia con lo antes relacionado, es preciso acotar que el Instituto de Acceso a la Información Pública por resolución con referencia NUE 160-A-2015 (MV), de fecha 17/05/2016, sostuvo que “...el art. 110 letra f) de la LAIP reconoce la vigencia de todas aquellas normas contenidas en leyes procesales relativas al acceso de expedientes durante el período de su tramitación. En tal sentido, y en coherencia con lo resuelto por la Sala de lo Constitucional en la sentencia de inconstitucionalidad 7-2006 y 6-2012, de interpretarse que el legislador deliberadamente estableció que el acceso a los expedientes relacionados con normas procesales se rige por éstas y no por lo dispuesto en la LAIP...”.

Asimismo, el mencionado Instituto por resolución con referencia NUE 150-A-2017, de fecha 09/08/2018, determinó que si bien la LAIP le otorga facultades para dirimir controversias “entre los entes obligados y la población peticionaria en general, dichas

controversias deben versar sobre temas de **acceso a la información pública** para que se active la competencia objetiva y así conocer de los casos que se presentan en esta instancia”; por tanto, declaró improponible el recurso de apelación interpuesto por una ciudadana contra resolución emitida por la suscrita, respecto a información relacionada con copia de expedientes judiciales.

III) En ese orden de ideas, en el presente caso el solicitante en concreto requiere “AL JUZGADO ESPECIALIZADO DE SENTENCIA DE SAN SALVADOR CON DENOMINACION ADMINISTRATIVA -A, Y A LA CAMARA ESPECIALIZADA DE LO PENAL, SE LES SOLICITA UNA COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE NOTIFICACION PERSONAL FIRMADA POR EL PROCESADO XXXXXXXXXXXXX, EN LA QUE CONSTA QUE SE LE NOTIFICO LA RESOLUCION DICTADA EN EL INCIDENTE DE APELACION MARCADO BAJO REFERENCIA: 113 A LA 122(APE)/16-10, Y UNA COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE NOTIFICACION PERSONAL FIRMADA POR EL PROCESADO XXXXXXXXXXXXX, EN LA QUE CONSTA QUE SE LE NOTIFICO LA RESOLUCION DICTADA POR LA SALA DE LO PENAL EN LA REFERENCIA JUDICIAL 344 C 2016, AMBAS RELACIONADAS AL PROCESO PENAL SEGUIDO CONTRA XXXXXXXXXXXXX EN EL JUZGADO ESPECIALIZADO DE SENTENCIA DE SAN SALVADOR CON DENOMINACION ADMINISTRATIVA -A, IDENTIFICADO EN SEDE DE SENTENCIA CON REFERENCIA 169-183-A-2015, ACLARANDOSE QUE SE SOLICITAN LAS ACTAS DE NOTIFICACION DE AMBAS RESOLUCIONES EFECTUADAS AL PROCESADO DE MANERA PERSONAL Y POR MEDIO DE LAS CUALES SE LE GARANTIZO EL DERECHO DE CONOCER EL CONTENIDO DE LAS MISMAS, LUEGO DE SER DICTADAS, Y NO AL ACTA DE NOTIFICACION DE FIRMEZA DE LA SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN SU CONTRA.” (sic).

En consecuencia, conforme a los criterios sostenidos por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y el Instituto de Acceso a la Información Pública -antes citados- se determina que la información solicitada es de carácter jurisdiccional y, por tanto, escapa del ámbito de aplicación de la LAIP, pues en este caso solicita se brinde documentación propia de tribunales, cuya obtención precisa el cumplimiento de ciertos requisitos contemplados en el Código Procesal Penal. En consecuencia, no le compete a la


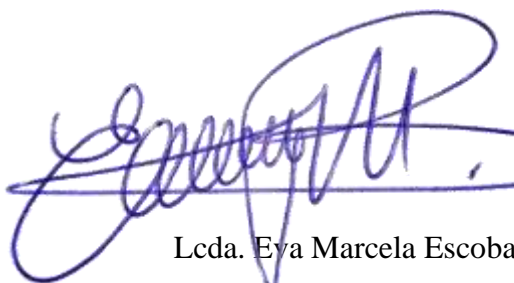
suscrita tramitar la solicitud presentada en fecha 24/05/2019, por el ciudadano XXXXXXXXXXXXX, en su calidad de apoderado general judicial con cláusula especial de XXXXXXXXXXXXX, al tratarse de información propiamente jurisdiccional, que debe ser requerida ante las instancias judiciales correspondientes.

Con base en los razonamientos precedentes y artículos 71, y 72 de la LAIP, se resuelve:

1) Declarar la incompetencia de la suscrita para tramitar la solicitud presentada por el ciudadano XXXXXXXXXXXXX, en su calidad de apoderado general judicial con cláusula especial de XXXXXXXXXXXXX, por ser la información requerida de índole jurisdiccional.

2) Se le sugiere al peticionario gestionar directamente su solicitud ante las instancias judiciales correspondientes.

3) Notifíquese.-



Lcda. Eya Marcela Escobar Pérez

Oficial de Información Interina del Órgano Judicial

NOTA: La Unidad de Acceso a la Información Pública del Órgano Judicial ACLARA: que la presente es una copia de su original, a la cual le fueron eliminados ciertos elementos para la conversión en versión pública de conformidad con los artículos 30 y 24 letra c) de la Ley de Acceso a la Información Pública.